



# Asamblea General

Distr. general  
26 de febrero de 2020

Original: español

---

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### **Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019**

#### **Opinión núm. 75/2019, relativa a Roberto Eugenio Marrero Borjas (República Bolivariana de Venezuela)**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 9 de julio de 2019 al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela una comunicación relativa a Roberto Eugenio Marrero Borjas. El Gobierno solicitó una extensión del plazo de contestación, la cual fue concedida, y respondió a la comunicación el 8 de octubre de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. El Sr. Marrero es venezolano, abogado, egresado de la Universidad Santa María, Caracas, y especialista en derecho constitucional, con estudios realizados en la Universidad de Salamanca (España). Asimismo, es fundador y miembro de la dirección nacional del partido político Voluntad Popular. Fue director de la alcaldía del municipio Baruta entre 2008 y 2012, y secretario de la Asamblea Nacional, para el período 2016-2017.

5. Según la fuente, también fue concejal electo del municipio Baruta del estado Miranda entre 2013 y 2015 y candidato a diputado por lista por el estado Monagas en las elecciones de 2015, pero su inscripción fue eliminada por el Consejo Nacional Electoral. Entre 2014 y 2015, fue abogado defensor de la causa del líder opositor y coordinador nacional de Voluntad Popular.

6. Informa también la fuente que el Sr. Marrero fue designado jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional el 8 de febrero de 2019.

7. Informa la fuente que el 15 de marzo de 2019, los fiscales provisorios 67 Nacional con Competencia Plena y 83 Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, cumpliendo con el requerimiento propuesto en el acta elaborado en esa misma fecha, 15 de marzo de 2019, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), y fundamentados en esta, dictaron la orden de inicio, y solicitaron a la Jueza Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia Nacional en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, las órdenes de allanamiento y de aprehensión, en contra del Sr. Marrero.

8. La fuente sostiene que el 20 de marzo de 2019, la Jueza Especial Primera de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción Nacional y Competencia para Conocer y Decidir en Delitos Asociados a Corrupción y Delincuencia Organizada, procedió a acordar orden de allanamiento de los apartamentos del Sr. Marrero y de su colaborador, así como a decretar orden de aprehensión en contra del Sr. Marrero.

9. La fuente informa que siendo aproximadamente las 2 horas de la mañana del 21 de marzo de 2019, encontrándose el Sr. Marrero y su colaborador, en el interior de sus respectivas viviendas, ubicadas en el mismo edificio en Caracas, una comisión de 150 funcionarios del SEBIN se presentó en dicho edificio.

10. El colaborador del Sr. Marrero escuchó ruidos en el exterior de su vivienda, observando la presencia de funcionarios del SEBIN, que ingresaron por la fuerza en el interior del edificio y seguidamente ingresaron en el interior de su vivienda. Procedió a identificarse como diputado de la Asamblea Nacional con su credencial correspondiente, y pese a ello, los funcionarios del SEBIN le lanzaron al piso en posición de cúbito ventral y un funcionario lo inmovilizó con el peso de su cuerpo sobre su espalda. Una vez inmovilizado en el suelo y registrada toda la vivienda, ingresaron los fiscales y le interrogaron preguntándole respecto al domicilio del Sr. Marrero.

11. Paralelamente, varios funcionarios entraban y salían de la vivienda, practicaban un registro exhaustivo de la misma y seguidamente interrogaban al colaborador del Sr. Marrero respecto al lugar de ubicación del mismo. Los funcionarios actuantes en el procedimiento estaban uniformados, no poseían identificación de sus nombres y sus rostros estaban cubiertos.

12. No permitieron al colaborador del Sr. Marrero hacer una llamada telefónica y le mantuvieron en tales condiciones durante un tiempo, luego de lo cual fue liberado. Posteriormente, le mostraron una orden judicial y le comentaron que en el procedimiento

había fiscales del Ministerio Público. Se le permitió leer la orden de allanamiento donde pudo identificar que se indicaba la dirección de su domicilio, pero no se indicaba su nombre. La orden había sido solicitada por los fiscales y fue acordada por una jueza del Tribunal Tercero de Terrorismo.

13. Seguidamente ingresaron en el interior de la vivienda del Sr. Marrero, el cual fue conducido a un área de su vivienda mientras los funcionarios se encargaban de registrar el inmueble. De inmediato manifestaron haber encontrado armas y una granada; acto seguido ingresaron los fiscales y los testigos llevados a las residencias. El Sr. Marrero fue privado de su libertad y al ser retirado por los funcionarios policiales del lugar, acusó a los agentes de haber plantado dos fusiles y una granada en la vivienda. Asimismo, antes de ser detenido envió un mensaje de voz en el que afirma que fue detenido. Se tiene información extraoficial de que el Sr. Marrero se encuentra en la sede del SEBIN ubicada en El Helicoide.

14. Informa la fuente que la audiencia de presentación debía iniciarse el viernes 22 de marzo de 2019, cumpliendo con el plazo de 48 horas que establece la ley para dicho procedimiento; sin embargo, la jueza del Tribunal Primero de Terrorismo se retiró del juzgado. Simultáneamente, el Sr. Marrero fue trasladado al Palacio de Justicia y presentado en un tribunal diferente al que emitió la orden de captura, razón por la cual el tribunal declinó su competencia y fue suspendida la audiencia. Posteriormente, los días 25 y 26 de marzo la audiencia fue suspendida por causa de un apagón nacional. Finalmente, la audiencia de presentación se efectuó el 28 de marzo de 2019, seis días después de su detención. Los fiscales actuantes en la mencionada audiencia han actuado en casos de persecución contra figuras de la oposición política, resalta la fuente.

15. Según la fuente, el 28 de marzo de 2019, se inició la audiencia de presentación. En la misma, los fiscales señalaron que procedían a poner a la orden de ese despacho al Sr. Marrero, y a otros, a quienes les atribuye la comisión de los delitos de traición a la patria, previsto y sancionado en el artículo 128, conspiración, previsto y sancionado en el artículo 132 y el delito de usurpación de funciones, previsto y sancionado en el artículo 213, todos del Código Penal, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas de guerra y explosivos, previstos y sancionados en los artículos 35, 37 y 38 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Ante ello, las defensas de los imputados alegaron la nulidad de todo lo actuado en virtud de las irregularidades que dieron inicio a los actos subsiguientes a las órdenes de allanamiento y detención, así como por el irregular proceder que distinguió el allanamiento practicado.

16. El 28 de marzo de 2019, la jueza del caso, en su condición de Juez Especial Primera de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción Nacional y Competencia para Conocer y Decidir en Delitos Asociados a Corrupción y Delincuencia Organizada, procedió a pronunciarse acogiendo la precalificación del Ministerio Público únicamente en cuanto a los delitos de conspiración previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal, y legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas de guerra y explosivos, previstos y sancionados en los artículos 35, 37 y 38 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo; asimismo dictó medida de privación preventiva de libertad contra el Sr. Marrero, ordenando su reclusión en las instalaciones del SEBIN. La fuente destaca que la decisión fue dada a conocer el 14 de junio de 2019.

17. El 6 de junio de 2019, los defensores del Sr. Marrero, interpusieron la oposición a la persecución penal, en relación a acusación incoada por el Fiscal Provisorio 39º del Área Metropolitana de Caracas y el Fiscal Auxiliar 73º (E), con Competencia Nacional en materia de los delitos de Legitimación de Capitales, Financieros y Económicos por los delitos de conspiración, ocultamiento de arma de guerra, explosivos, legitimación de capitales y asociación, previstos y sancionados en los artículos 132 del Código Penal, y 38, 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Ello en virtud de carecer la acusación fiscal propuesta de los requisitos esenciales exigidos en el artículo 308 específicamente los previstos en los numerales 2, 3 y 4, que se refieren a acreditar de manera previa en sus escritos de acusación, la explicación de una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al

imputado, nota la fuente. La fuente añade que dicha descripción constituye una obligación indeclinable para los representantes del Ministerio Público. El 17 de junio de 2019, los abogados del Sr. Marrero apelaron la decisión de 28 de marzo de 2019, que fue notificada el 14 de junio de 2019, en la cual se decreta la medida privativa de libertad. Entre otros, se alegó que la jueza se limitó a afirmar de manera abstracta la acreditación en autos, de “suficientes elementos de convicción”, sin embargo, no precisó cuáles eran esos elementos de convicción sobre la autoría o participación en la comisión de los referidos ilícitos. Asimismo, se alegó que tampoco resultaba acreditado de forma motivada por la jueza de control el peligro de fuga.

18. El 18 de junio de 2019, el Tribunal de Control de Caracas ordenó oralmente el pase a juicio del Sr. Marrero. Asimismo, el juzgado ordenó mantener su privativa de libertad. Al respecto, a la fecha, la decisión motivada no ha sido publicada.

19. La fuente destaca las declaraciones de estigmatización y criminalización del Sr. Marrero por las autoridades, inclusive, entre otros, por el Ministro de Interior, Justicia y Paz; por el Fiscal General; por el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y por el Presidente.

20. La fuente también nota que los abogados del Sr. Marrero no han podido obtener el acceso a las actas que conforman el expediente ante la Fiscalía. La fuente explica que este expediente debe contener todas las actividades de investigación, pero es secreto. Debido a que, de acuerdo con lo informado por esta, las diligencias de investigación que se están practicando se están desarrollando ante el SEBIN, entonces, concluye la fuente, es la policía política quien está investigando los supuestos hechos y no la Fiscalía.

21. Los abogados del Sr. Marrero solo han podido acceder al expediente que está en tribunales, donde consta el acta de presentación. Sin embargo, nota la fuente, a pesar de que la ley lo ordena, el Tribunal no ha dictado el auto motivado de la imposición de medida privativa de libertad, la decisión que ordena su detención. Por lo tanto, no se conocen las razones de hecho y derecho que el Tribunal consideró para dictar la medida privativa de libertad y no se ha podido ejercer ningún recurso contra dicha medida.

22. La fuente resalta que hasta el 13 de mayo de 2019 se mantuvo al Sr. Marrero incomunicado en la sede del SEBIN, es decir, después de pasar 52 días sin comunicarse con su familia tras ser detenido se le permitió una visita familiar. El 13 de mayo pudo tener contacto con sus abogados. Según la fuente, la respuesta de los funcionarios del SEBIN a los abogados era que el Sr. Marrero no tenía visitas permitidas, sin que mediara alguna respuesta congruente a los reclamos que se formulaban.

23. Por lo anterior, la fuente sostiene que la detención del Sr. Marrero se enmarca dentro de las categorías II, III y V determinadas por el Grupo de Trabajo para considerar que una detención es arbitraria.

24. La fuente nota que la detención del Sr. Marrero, dirigente del partido Voluntad Popular y el jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional, se debió al ejercicio del derecho a la participación política y de libertad de expresión particularmente por su pertenencia al partido Voluntad Popular, y ser la mano derecha del presidente de la Asamblea Nacional. La fuente sostiene que la detención del Sr. Marrero contraviene los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 19, 21 y 22 del Pacto, por lo que es arbitraria conforme a la categoría II.

25. La fuente también enumera los hechos que, según ella, han configurado la violación al debido proceso y al derecho a la defensa en el presente caso y solicita al Grupo de Trabajo que considere que la detención del Sr. Marrero contraviene lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 9 y 14 del Pacto, lo cual la torna arbitraria conforme a la categoría III.

26. En primer lugar, se nota que el acta de investigación penal elaborada por el SEBIN tipifica conductas y gira instrucciones al Ministerio Público, en contravención de lo dispuesto en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, que limita la actuación policial a realizar diligencias necesarias y urgentes, dirigidas a identificar y ubicar a los presuntos autores de aquellos hechos cuyo conocimiento ha tenido.

27. El acta, en contravención con la legislación venezolana, ordena al Ministerio Público iniciar una investigación, solicitar una orden de allanamiento y la aprehensión del Sr. Marrero. Esto constituye, sostiene la fuente, un acto de usurpación por el inspector del SEBIN encargado del caso de funciones encomendadas a fiscales.

28. En opinión de la fuente, esto invalida el acta policial de investigación que debió haberse desestimado y dejado sin efectos. Sin embargo, sostiene la fuente, la irregular actuación constituyó el fundamento para perpetrar otras violaciones, esta vez por parte del Ministerio Público.

29. Adicionalmente, la fuente resalta que el Juez Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción Nacional y Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo debía antes pronunciarse sobre la procedencia de la medida privativa formulada, y constatar el cumplimiento por parte del Ministerio Público de los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, y contrariamente a la obligación garantista inherente a su condición de Juez en Funciones de Control, el juez omitió deliberadamente exigir tales requisitos y procedió a asegurar cumplidos los requisitos los fiscales, decretando la orden de aprehensión en contra del Sr. Marrero.

30. La fuente también sostiene que el procedimiento policial del allanamiento practicado es violatorio del debido proceso en la República Bolivariana de Venezuela. El juez otorgó la orden para buscar armas y se basó en la palabra de un solo agente del SEBIN que nunca explicó que existiera ninguna evidencia de contrabando en la solicitud de revisar la casa. La fuente recuerda que el Grupo de Trabajo, en opiniones que ha emitido en ocasiones anteriores sobre detenciones arbitrarias a cargo de las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, ha podido identificar una práctica de colocar armas en los vehículos o los hogares de disidentes o integrantes de partidos políticos de oposición, para justificar su detención.

31. Adicionalmente, la fuente nota que el Sr. Marrero fue presentado ante la opinión pública por altos funcionarios del Gobierno como si hubiera cometido un delito, a pesar de que no se le habían presentado cargos en contra ni mucho menos se hubiera emitido sentencia alguna en su contra. Ello, según la fuente, implica una violación del derecho a la presunción de inocencia, contenido en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

32. La fuente también resalta que la audiencia de presentación debía iniciarse el viernes 22 de marzo de 2019, cumpliendo con el plazo de 48 horas que establece la ley para dicho procedimiento. Sin embargo, se efectuó el 28 de marzo de 2019, seis días después de su detención.

33. El 28 de marzo de 2019, la jueza del Tribunal 1° de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo dictó privativa de libertad al Sr. Marrero por los delitos de conspiración, asociación para delinquir, legitimación de capitales, ocultamiento de armas y usurpación de funciones. La fuente sostiene que dicho pronunciamiento es incongruente, ya que en la audiencia de presentación se le imputaron los cargos de conspiración, asociación para delinquir, legitimación de capitales, usurpación de funciones y ocultamiento de armas. El delito de traición a la patria —que forma parte de la orden de aprehensión— no fue imputado, y el delito de usurpación de funciones no fue admitido, porque no se demostró en el expediente que él estaba incurso en el delito.

34. El 13 de mayo de 2019, luego de unos 50 días detenido, los abogados y familiares pudieron reunirse por primera vez con el Sr. Marrero. La fuente sostiene que ello implica una violación al derecho del Sr. Marrero de contar con abogado de su elección, lo que además afecta su derecho a defenderse de las acusaciones presentadas en su contra. La fuente nota que en ese sentido, el artículo 14, párrafo 3, apartado b), del Pacto establece el derecho a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un abogado de su elección”. Dicho derecho debe ser informado desde el momento del arresto, e inmediatamente después la asistencia jurídica debe poder prestarse en un espacio adecuado para que se garantice la confidencialidad e intimidad de las conversaciones entre la persona detenida y la persona que legalmente la representa.

35. Por último, la fuente nota que la detención del Sr. Marrero se encuadra en la práctica de detenciones llevadas a cabo por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de personas que pertenecen a partidos de la oposición política, defensores de derechos humanos o de personas que expresan críticas sobre la actuación de las autoridades.

36. Por lo tanto, la fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Marrero constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por su pertenencia al partido de oposición política Voluntad Popular, que contraviene los artículos 2 y 26 del Pacto y los artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, según la fuente, la detención del Sr. Marrero es arbitraria conforme a la categoría V.

#### *Respuesta del Gobierno*

37. El Grupo de Trabajo transmitió los alegatos de la fuente al Gobierno el 9 de julio de 2019, solicitándole que suministrase una respuesta antes del 9 de septiembre de 2019. El Gobierno solicitó una extensión de dicho plazo, que fue concedida hasta el 9 de octubre de 2019. El Gobierno proporcionó su respuesta el 8 de octubre de 2019.

38. El Gobierno indica que el Sr. Marrero fue detenido el 21 de marzo de 2019 por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, derivados de planes y acciones de desestabilización política. En el marco del proceso penal seguido en su contra, al Sr. Marrero le han sido imputados los delitos de conspiración previsto en el artículo 132 del Código Penal; y legitimación de capitales, asociación y ocultamiento de armas de guerra, explosivos y municiones, previstos en los artículos 35, 37 y 38 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

39. El Gobierno nota que la referida investigación penal se inició en virtud de un acta policial, mediante la cual la Dirección de Contrainteligencia del SEBIN dejó constancia de que un ciudadano venezolano, estando en zona fronteriza, se dispuso a pasar desde Colombia, por caminos improvisados, un cargamento de armas largas y material explosivo, los cuales pagó en territorio colombiano en efectivo y con divisas extranjeras.

40. El Gobierno también informa que igualmente las investigaciones preliminares por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, determinaron que presuntamente el Sr. Marrero se encontraba reclutando personas de distintas nacionalidades de América Central y América del Sur para efectuar acciones violentas contra las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela.

41. En virtud de los resultados de la investigación, el 15 de marzo de 2019, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, con Jurisdicción a Nivel Nacional, la expedición de una orden de aprehensión contra el Sr. Marrero, así como una orden de allanamiento a su residencia. El 20 de marzo de 2019, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, con Jurisdicción a Nivel Nacional, dictó las solicitadas órdenes de aprehensión y de allanamiento.

42. El 21 de marzo de 2019, el Sr. Marrero fue detenido en su residencia por una comisión del SEBIN, en cumplimiento de la referida orden de aprehensión en el marco del allanamiento igualmente autorizado por el tribunal. La aprehensión fue realizada en presencia de fiscales del Ministerio Público y testigos.

43. Según el Gobierno, al momento de la aprehensión, el Sr. Marrero fue notificado de los derechos del imputado y fue informado de los motivos de su detención. Seguidamente fue trasladado a la sede del SEBIN en Caracas.

44. Conforme con el artículo 44 de la Constitución, según el cual la persona aprehendida debe ser puesta a la orden de un tribunal dentro de las 48 horas siguientes a su detención, el 23 de marzo de 2019, el Sr. Marrero fue presentado ante el Tribunal de Control que se encontraba de guardia en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

45. El Gobierno informa que el Tribunal de Control se declaró incompetente para conocer el asunto y declinó su competencia en el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control.

46. El 25 de marzo de 2019, el Sr. Marrero fue trasladado al Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control para realizar la audiencia conforme a lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta audiencia no pudo realizarse en virtud de un motivo de fuerza mayor, a saber, una falla masiva del suministro eléctrico que afectó a 17 estados del país. La audiencia tampoco pudo realizarse los dos días siguientes por la misma razón.

47. La audiencia fue celebrada el 28 de marzo de 2019. En esta oportunidad, Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control ratificó la medida de privación judicial preventiva de libertad por considerar que existían elementos suficientes para presumir peligro de fuga, de conformidad con los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal.

48. El 17 de junio de 2019 fue realizada, en el tribunal de la causa, la audiencia preliminar del Sr. Marrero. El tribunal admitió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenó el pase a juicio del Sr. Marrero. El tribunal también acordó mantener la privación judicial preventiva de libertad.

49. El Gobierno destaca que las condiciones de detención del Sr. Marrero se ajustan a lo establecido en las normas internacionales aplicables, incluyendo el acceso a instalaciones sanitarias.

50. El Gobierno también afirma que en todo momento ha respetado al Sr. Marrero todos los derechos y garantías que le corresponden en su condición del imputado, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales aplicables.

51. El Gobierno concluye que la detención del Sr. Marrero no puede considerarse como arbitraria conforme a la categoría II, pues la misma no es resultado, no guarda relación, ni fue realizada con ocasión al ejercicio de sus derechos garantizados por los artículos 19, 20 y 21 del Pacto.

52. El Gobierno explica que el proceso penal no busca sancionar la opinión pública del Sr. Marrero, sino conductas antijurídicas. Al Gobierno le consta que la conducta del Sr. Marrero constituye un delito tipificado en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, siendo juzgado en un juicio justo con todas las garantías constitucionales del debido proceso.

53. De igual forma, nota el Gobierno, la detención del Sr. Marrero tampoco puede considerarse como arbitraria conforme a la categoría III, por cuanto el proceso judicial se ha desarrollado con plena observancia de las garantías del derecho al debido proceso, reconocidos en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto.

54. El Gobierno explica que el proceso penal se inició a partir de los resultados de las investigaciones realizadas por el SEBIN conforme con los artículos 115 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Le corresponde al Ministerio Público decidir si existen méritos suficientes para iniciar un proceso penal.

55. Por otra parte, afirma el Gobierno, contrariamente a lo afirmado por la fuente, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, sí examinó detalladamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación procesal penal, antes de proceder a expedir la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. De igual manera, la orden de allanamiento resulta apegada a lo establecido en los artículos 196 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

56. Igualmente, el Sr. Marrero fue presentado ante un tribunal de control dentro de las 48 horas después de su detención. El hecho de que la audiencia se haya realizado el 28 de marzo de 2019 no constituye una violación al debido proceso, pues el tribunal no tenía despacho los días 23 a 27 de marzo producto de una causa de fuerza mayor que afectó a

casi todo el territorio nacional. Asimismo, la privación preventiva de libertad se encuentra ajustada a lo previsto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

57. El Gobierno también sostiene que el hecho de que las autoridades hayan anunciado públicamente la detención del Sr. Marrero no constituye una violación, pues la difusión de tal información fue autorizada por el Ministerio Público. El Sr. Marrero fue en todo momento asistido por un abogado de su confianza.

58. Finalmente, el Gobierno afirma que la detención del Sr. Marrero no constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos por motivos de discriminación por su opinión política y su pertenencia a un partido de oposición y no puede catalogarse arbitraria conforme a la categoría V. La detención fue aplicada por la presunta comisión de los delitos de conspiración, ocultamiento de armas y legitimación de capitales.

*Comentarios adicionales de la fuente*

59. El Grupo de Trabajo transmitió a la fuente la respuesta del Gobierno el 8 de octubre de 2019. La fuente suministró comentarios y observaciones finales a la respuesta del Gobierno el 21 de octubre de 2019.

60. En sus observaciones finales, la fuente afirma que es evidente que la detención del Sr. Marrero, dirigente del partido Voluntad Popular y jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional, se debió al ejercicio del derecho a la participación política y de libertad de expresión, particularmente por su pertenencia al partido Voluntad Popular, y por ser la mano derecha del presidente de la Asamblea Nacional. La fuente cita entrevistas de altos funcionarios del SEBIN describiendo órdenes directas del Presidente para cometer abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y siembra de evidencias para inculpar a opositores.

61. La fuente nota que el Grupo de Trabajo, en los últimos años, de manera reiterada se ha pronunciado sobre la comisión múltiple de detenciones arbitrarias de personas que forman parte de la oposición política al Gobierno, o bien por el hecho de haber ejercido los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de asociación, de reunión o de participación política.

62. La fuente también sostiene que las afirmaciones del Gobierno acerca del cumplimiento de las normas internacionales que garantizan el debido proceso no han sido sustentadas. En primer lugar, el Gobierno no proporciona el acta de investigación de 15 de marzo de 2019, que es el único elemento en que se basan los fiscales y la jueza para solicitar y decretar la orden de captura y allanamiento emitida el 20 de marzo de 2019.

63. El acta de investigación penal, de 15 de marzo de 2019, no contiene una descripción clara, precisa y detallada de los hechos cuya comisión se le atribuye al Sr. Marrero, que permita conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que determinen su veracidad, o por lo menos presumir su existencia.

64. La fuente destaca las irregularidades en el allanamiento, en el inicio del proceso, la celebración tardía de la audiencia de presentación, la falta de motivación para ordenar la privación preventiva de la libertad, la violación a la presunción de inocencia, la falta de acceso a sus abogados, visita de sus familiares y falta de acceso al expediente.

65. En particular, la fuente alega que la audiencia de presentación debía iniciarse el viernes 22 de marzo de 2019, cumpliendo con el plazo de 48 horas que establece la ley para dicho procedimiento; sin embargo, la jueza del Tribunal Primero de Terrorismo se retiró del juzgado. Simultáneamente, el Sr. Marrero fue trasladado al Palacio de Justicia y presentado en un tribunal diferente al que emitió la orden de captura, razón por la cual el tribunal declinó su competencia y fue suspendida la audiencia. Posteriormente los días 25 y 26 de marzo la audiencia fue suspendida por causa de un apagón nacional. Finalmente, la audiencia de presentación se efectuó el 28 de marzo de 2019, seis días después de su detención. La fuente recordó que el Comité de Derechos Humanos ha señalado que cuando las demoras son ocasionadas por la falta de recursos, los Estados deben asignar, en la medida de lo posible, recursos presupuestarios suficientes<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Observación general núm. 35 (2014) sobre libertad y seguridad personales, párr. 30.



66. La fuente también destaca, entre otros argumentos, que en varias oportunidades no ha sido posible para los abogados el acceso a las actas que conforman el expediente ante la Fiscalía. Asimismo, solo el 13 de mayo de 2019, después de pasar 52 días sin comunicarse con su familia, se le permitió al Sr. Marrero una visita familiar y pudo tener contacto con sus abogados. La respuesta de los funcionarios del SEBIN a los abogados, en esa ocasión, fue que el Sr. Marrero no tiene visitas permitidas, sin que mediara alguna respuesta congruente a los reclamos.

### **Deliberaciones**

67. El Grupo de Trabajo agradece a las partes la comunicación inicial y las aportaciones posteriores para la resolución del presente caso.

68. El Grupo de Trabajo tiene por mandato investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente que son puestos en su conocimiento, para lo cual se remite a las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto, además de otras normas jurídicas internacionales relevantes, conforme a sus métodos de trabajo.

69. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. Afirmaciones aisladas y no sustentadas, de que se han seguido los procedimientos legales, no son suficientes para desvirtuar las alegaciones de la fuente<sup>2</sup>.

70. El Grupo de Trabajo, por la información recibida de las partes fue convencido de que el Sr. Marrero es fundador del partido político Voluntad Popular. Ha sido funcionario público municipal, ha ocupado cargos en la dirigencia de su partido, representante popular y candidato a diputado. Desde febrero de 2019 fungía como jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional.

71. El Grupo de Trabajo fue convencido de que el 15 de marzo de 2019, los fiscales solicitaron al Poder Judicial órdenes de allanamiento y de aprehensión en contra del Sr. Marrero, las cuales fueron expedidas el 20 de marzo de 2019, mientras que el allanamiento y posterior arresto sucedió un día después.

### *Categoría II*

72. El Grupo de Trabajo destaca que toda persona tiene derecho a libertad de expresión, lo que comprende el derecho a difundir información e ideas de toda índole, sea oralmente o por cualquier otra forma. Además, el Grupo de Trabajo también reitera que el ejercicio de ese derecho puede estar sujeto a restricciones, expresamente fijadas por la ley y necesarias para asegurar el respeto a los derechos o reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública<sup>3</sup>.

73. Para el Grupo de Trabajo, la libertad de opinión y de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas<sup>4</sup>. Ambas libertades son base para el ejercicio efectivo de una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la participación política, contenidos en los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 del Pacto<sup>5</sup>.

74. Es de tal importancia la libertad de expresión, que ningún gobierno puede conculcar otros derechos humanos por las opiniones de índole política, científica, histórica, moral, religiosa o de cualquier tipo, efectuadas o atribuidas a una persona. En consecuencia, no es compatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto, calificar como delito la expresión de una opinión, ni tampoco es permisible que una persona sea

<sup>2</sup> A/HRC/19/57, párr. 68.

<sup>3</sup> Opinión núm. 58/2017, párr. 42.

<sup>4</sup> Observación general núm. 34 (2011) sobre libertad de opinión y libertad de expresión, párr. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, párr. 4.

acosada, intimidada o estigmatizada, detenida, o sujeta a prisión preventiva, enjuiciamiento o reclusión, en razón de sus opiniones<sup>6</sup>.

75. Además, las libertades de opinión y expresión constituyen la base para el pleno goce de una amplia gama de otros derechos humanos, por ejemplo, para el ejercicio del derecho a la participación en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a ser elegido<sup>7</sup>.

76. El Grupo de Trabajo fue convencido de que el Sr. Marrero fue privado de la libertad debido al ejercicio del derecho a la participación política y de libertad de expresión particularmente por su pertenencia al partido Voluntad Popular, y ser la mano derecha del presidente de la Asamblea Nacional, lo que contraviene los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 19, 21 y 22 del Pacto, por lo que es arbitraria conforme a la categoría II.

### *Categoría III*

#### *El derecho de ser juzgado sin dilaciones indebidas*

77. El Pacto reconoce el derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgado sin dilaciones indebidas<sup>8</sup>. El Grupo de Trabajo, siguiendo al Comité de Derechos Humanos, considera que las dilaciones en los procedimientos penales solo pueden justificarse por la complejidad del caso o el comportamiento de las partes, de lo contrario esas demoras son incompatibles con el Pacto y comprometen la imparcialidad de un juicio<sup>9</sup>. Asimismo, dicho Comité ha señalado que cuando dichas demoras son ocasionadas por la falta de recursos, los Estados deben asignar, en la medida de lo posible, recursos presupuestarios complementarios suficientes<sup>10</sup>.

78. El Grupo de Trabajo ha señalado anteriormente que las personas acusadas tienen derecho a comparecer ante un juez para ser juzgado sin demora, así como para que determine la legalidad de la detención<sup>11</sup>. El Grupo de Trabajo, en consonancia con lo señalado por el Comité de Derechos Humanos, reconoce que la presencia física de las personas privadas de libertad a las audiencias es relevante, y que además contribuye a garantizar el derecho a la seguridad e integridad personales de las personas detenidas<sup>12</sup>.

79. El Grupo de Trabajo fue convencido de que la audiencia de presentación debía iniciarse el viernes 22 de marzo de 2019, en el plazo de 48 horas que establece la ley; sin embargo, por diversos motivos no atribuibles al Sr. Marrero dicha audiencia se celebró seis días después, en concreto, el 28 de marzo de 2019: a) la jueza competente se ausentó del tribunal; b) el detenido fue trasladado y presentado en un tribunal diferente al que emitió la orden de captura, razón por la cual el tribunal declinó su competencia y se suspendió la audiencia, y c) en dos ocasiones (dos días diferentes) la audiencia fue suspendida por un apagón nacional.

80. El Grupo de Trabajo constató que en perjuicio del Sr. Marrero se violó el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, en contravención de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3, apartado c), del Pacto.

#### *Presunción de inocencia*

81. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11, párrafo 1, y el Pacto en su artículo 14, párrafo 2, reconocen el derecho de toda persona acusada de un delito a que se presuma su inocencia. Ese derecho impone una serie de obligaciones a cargo de todas las instituciones del Estado, de que el acusado sea tratado como inocente hasta que se haya dictado sentencia más allá de toda duda razonable. Para el Grupo de Trabajo, al

<sup>6</sup> *Ibid.*, párr. 9.

<sup>7</sup> Artículo 25 del Pacto.

<sup>8</sup> Artículo 14, párrafo 3, apartado c).

<sup>9</sup> Observación general núm. 32 (2007) sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Opinión núm. 78/2018, párrs. 75 y 76.

<sup>12</sup> Observación general núm. 35, párrs. 34 y 42.

igual que para el Comité de Derechos Humanos, ese derecho obliga a todas las autoridades públicas, incluidas las del Poder Ejecutivo, a no prejuzgar el resultado de un juicio, lo que implica abstenerse de hacer declaraciones públicas que afirmen la culpabilidad del acusado<sup>13</sup>.

82. El Grupo de Trabajo ha determinado que las injerencias públicas que condenan abiertamente a los acusados, antes de la sentencia, vulneran la presunción de inocencia y constituyen una intrusión indebida que afecta a la independencia y la imparcialidad del tribunal<sup>14</sup>.

83. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

[e]l derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, ese derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso, como por otras autoridades públicas, por lo cual éstas deben ser discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada<sup>15</sup>.

84. El Grupo de Trabajo ha reiterado que las declaraciones públicas de altos funcionarios violan el derecho a la presunción de inocencia de una persona, por haberla señalado como responsable de un delito que aún no había sido juzgado, y con ello hacer creer al público de su responsabilidad, así como pretender influir o prejuzgar la valoración de los hechos por la autoridad judicial competente<sup>16</sup>.

85. El Grupo de Trabajo es consciente de que el 21 de marzo de 2019, se allanó el inmueble del Sr. Marrero y el de su colaborador en un operativo integrado por 150 funcionarios del SEBIN.

86. El Grupo de Trabajo fue convencido de que durante el allanamiento, el Sr. Marrero fue conducido a un área de su vivienda mientras se registraba su departamento. El Sr. Marrero fue privado de su libertad y al ser retirado por los funcionarios policiales del lugar, acusó a los agentes de haber plantado dos fusiles y una granada en la vivienda. El Grupo de Trabajo fue convencido de que el juez otorgó la orden para buscar armas y se basó en la palabra de un solo agente del SEBIN que nunca produjo ninguna evidencia de contrabando en la solicitud de revisar la casa.

87. El Grupo de Trabajo ha observado que en ocasiones anteriores, como se puede contemplar en opiniones que ha emitido sobre detenciones arbitrarias a cargo de las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, ha podido identificar una práctica de colocar armas en los vehículos o los hogares de disidentes o integrantes de partidos políticos de oposición, para justificar su detención<sup>17</sup>.

88. El Grupo de Trabajo fue convencido de que el Sr. Marrero fue presentado ante la opinión pública por altos funcionarios del Gobierno como si hubiera cometido un delito.

89. Por ejemplo, el Ministro de Interior, Justicia y Paz señaló que el Sr. Marrero fue detenido por liderar un supuesto grupo que pretendía generar caos en el país. En rueda de prensa afirmó que “se dismanteló una célula terrorista que planificaba realizar ataques selectivos y para ello contrataron a mercenarios colombianos y centroamericanos para atacar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados y efectuar actos de

<sup>13</sup> Observación general núm. 32, párr. 30. Véase también *Kozulina c. Belarús* (CCPR/C/112/D/1773/2008), párr. 9.8.

<sup>14</sup> Opiniones núms. 90/2017, 76/2018 y 89/2018.

<sup>15</sup> *Pollo Rivera y otros vs. Perú*, párr. 177. Véase asimismo *Tibi vs. Ecuador*, párr. 182; y *J. vs. Perú*, párrs. 244 a 247. En términos similares, véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Allenet de Ribemont c. France*, párr. 41; *Daktaras v. Lithuania*, párr. 42; *Petkov v. Bulgaria*, párr. 91; *Peša v. Croatia*, párr. 149; *Gutsanovi v. Bulgaria*, párrs. 194 a 198; *Konstas v. Greece*, párrs. 43 y 45; *Butkevičius v. Lithuania*, párr. 53; *Khuzhin and Others v. Russia*, párr. 96; *Ismoilov and Others v. Russia*, párr. 161.

<sup>16</sup> Véanse las opiniones núms. 6/2019 y 12/2019.

<sup>17</sup> Véanse las opiniones núms. 49/2018, 52/2017 y 26/2015.

sabotajes a los servicios públicos”. El ministro señaló a Roberto Marrero de ser “responsable directo de estas bandas”.

90. Poco después, la Fiscalía General emitió un comunicado asegurando que el Sr. Marrero está bajo investigación por el presunto intento de magnicidio contra el Presidente de la República. El Presidente aseguró que el supuesto grupo terrorista al cual vincularon al diputado Roberto Marrero tenía como objetivo atacar estaciones del metro de Caracas, cuarteles, unidades militares, y hospitales.

91. El 28 de marzo de 2019, el Fiscal General de la Republica amenazó con sentencias al Sr. Marrero. Dijo, “la mano derecha de este usurpador ya está detenido [...] por estos casos y el intento de magnicidio ya tienen detenidos, y tendrán sentencias [...] como corresponde, siempre dentro del marco de la ley”.

92. Estas afirmaciones fueran realizadas a pesar de que no se habían presentado cargos en contra del Sr. Marrero, ni mucho menos se había dictado sentencia en su contra. Ello, para el Grupo de Trabajo, implica una violación el derecho a la presunción de inocencia, contenido en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto<sup>18</sup>.

#### *Derecho a la defensa adecuada*

93. El artículo 14, párrafo 3, apartado b), del Pacto reconoce el derecho de toda persona a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”, lo cual constituye una garantía importante para un juicio justo y para el principio de igualdad de armas<sup>19</sup>. Contar con los medios adecuados para la defensa incluye, entre otras, la posibilidad de acceder con anticipación a todos los materiales, documentos y otras pruebas que las fiscalías tengan previsto presentar ante el tribunal<sup>20</sup>.

94. Dicho derecho debe ser informado desde el momento del arresto, e inmediatamente después la asistencia jurídica debe poder prestarse en un espacio adecuado para que se garantice la confidencialidad e intimidad de las conversaciones entre la persona detenida y la persona que legalmente la representa.

95. El Grupo de Trabajo constató que el Sr. Marrero solo pudo reunirse con su abogado después de unos 50 días de detenido, lo que implica una violación al derecho a contar con abogado de su elección, lo que además afecta su derecho a defenderse de las acusaciones presentadas en su contra.

96. El Grupo de Trabajo fue convencido de que los abogados del Sr. Marrero no han podido obtener el acceso a las actas que conforman el expediente ante la Fiscalía, debido a que las diligencias de investigación que se están practicando se están desarrollando ante el SEBIN, y su trabajo es secreto.

97. De la misma manera, el Grupo de Trabajo es consciente de que los abogados del Sr. Marrero no conocen las razones de hecho y de derecho que el Tribunal consideró para dictar la medida privativa de libertad y no se ha podido ejercer ningún recurso contra dicha medida.

98. El Grupo de Trabajo fue convencido de que se violó el derecho a la defensa en el presente caso por lo que considera que la detención del Sr. Marrero contraviene lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 9 y 14 del Pacto, lo cual la torna arbitraria conforme a la categoría III.

#### *Categoría V*

99. El Grupo de Trabajo es de la opinión que la detención acreditada en el presente caso forma parte de serie de privaciones arbitrarias de libertad que se llevan a cabo por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de personas que

<sup>18</sup> Observación general núm. 32, párr. 30.

<sup>19</sup> *Ibid.*, párr. 32.

<sup>20</sup> *Ibid.*, párr. 33.

pertenecen a partidos de la oposición política, defensores de derechos humanos o de personas que expresan críticas sobre la actuación de las autoridades<sup>21</sup>.

100. El Grupo de Trabajo fue convencido de que la detención del Sr. Marrero se encuadra en la práctica de detenciones llevadas a cabo por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de personas que pertenecen a partidos de la oposición política, incluido el partido Voluntad Popular.

101. Por lo tanto, la privación de libertad del Sr. Marrero constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por su pertenencia al partido de oposición política Voluntad Popular, que contraviene los artículos 2 y 26 del Pacto y los artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual la hace arbitraria conforme con la categoría V.

### **Decisión**

102. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Roberto Eugenio Marrero Borjas es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 1, 7, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14, 19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II, III y V.

103. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Marrero sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.

104. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Marrero inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

105. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Marrero y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

106. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

107. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Marrero y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Marrero;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Marrero y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República Bolivariana de Venezuela con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

<sup>21</sup> Véanse las opiniones núms. 86/2018; 49/2018; 41/2018; 32/2018; 52/2017; 37/2017; 18/2017; 27/2015; 26/2015; 7/2015; 1/2015; 51/2014; 26/2014; 29/2014; 30/2014; 47/2013; 56/2012; 28/2012; 62/2011; 65/2011; 27/2011; 28/2011; 31/2010; y 10/2009.

108. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

109. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.

110. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>22</sup>.

*[Aprobada el 21 de noviembre de 2019]*

---

<sup>22</sup> Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 3.